



**Convención contra  
la Tortura y Otros Tratos  
o Penas Crueles,  
Inhumanos o Degradantes**

Distr.  
RESERVADA\*

CAT/C/38/D/298/2006  
24 de mayo de 2007

ESPAÑOL  
Original: FRANCÉS

COMITÉ CONTRA LA TORTURA  
38º período de sesiones  
(30 de abril a 18 de mayo de 2007)

**DECISIÓN**

**Comunicación N° 298/2006**

<i>Presentada por:</i>	C. A. R. M. <i>et al.</i> (representados por abogado)
<i>Presuntas víctimas:</i>	Los autores
<i>Estado Parte:</i>	Canadá
<i>Fecha de la queja:</i>	26 de junio de 2006 (carta inicial)
<i>Fecha de la presente decisión:</i>	18 de mayo de 2007
<i>Asunto:</i>	Expulsión del autor a un país en que corre peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Riesgo de sufrir torturas en caso de expulsión; riesgo de sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de expulsión
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna y no fundamentación
<i>Artículo de la Convención:</i>	Artículo 3

**[Anexo]**

---

\* Se divulga por decisión del Comité contra la Tortura.

**Anexo**

**DECISIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA ADOPTADA A TENOR  
DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y  
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES  
-38º PERÍODO DE SESIONES-**

**relativa a la**

**Comunicación N° 298/2006**

*Presentada por:* C. A. R. M. *et al.* (representados por abogado)

*Presuntas víctimas:* Los autores

*Estado Parte:* Canadá

*Fecha de la queja:* 26 de junio de 2006 (carta inicial)

*El Comité contra la Tortura*, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

*Reunido* el 18 de mayo de 2007,

*Habiendo concluido* el examen de la comunicación N° 298/2006, presentada en nombre de C. A. R. M. *et al.* con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

*Habiendo tenido en cuenta* toda la información que le han presentado los autores de la queja y el Estado Parte,

*Aprueba* la siguiente:

**Decisión del Comité contra la Tortura a tenor del artículo 22 de la Convención**

1.1. Los autores de la queja, C. A. R. M. *et al.*, de nacionalidad mexicana, se encuentran en la actualidad en el Canadá, donde presentaron una solicitud de asilo el 12 de noviembre de 2002. La solicitud fue rechazada el 11 de marzo de 2004. Los autores afirman que su expulsión a México constituiría una violación por el Canadá del artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Los representa un abogado.

1.2. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de la Convención, el Comité señaló la queja a la atención del Estado Parte el 28 de junio de 2006, pidiendo al Gobierno que le proporcionara información y sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de las denuncias. Al mismo tiempo, el Comité, actuando en virtud del párrafo 1 del artículo 108 de su reglamento, solicitó al Estado Parte que no expulsara a los autores de la queja mientras se estuviera examinando su caso. Mediante nota verbal de 29 de junio de 2006 el Estado Parte informó al Comité de que accedía a esa petición.

1.3. El 27 de septiembre de 2006 el Estado Parte pidió que se levantaran las medidas provisionales. El 19 de octubre de 2006 el Relator Especial encargado de las nuevas comunicaciones suspendió las medidas.

### **Los hechos expuestos por el autor**

2.1. Desde 1995 C. A. R. M. era, en San Andrés Cholula (Estado de Puebla, México), el animador principal de una empresa de nombre SIMA Computación, especializada en la venta, instalación y mantenimiento de equipos informáticos. Se había adjudicado a su empresa un contrato de equipamiento informático de la alcaldía, por conducto de un contador. Durante el trabajo que realizó para la alcaldía, C. A. R. M. fue supuestamente testigo en varias ocasiones de irregularidades y actos de corrupción.

2.2. Un día de 2002 C. A. R. M. presentó una oferta en el marco de un llamado a licitaciones para la instalación de equipos en las oficinas de la alcaldía. El contador, al parecer, lo citó para decirle que un amigo del alcalde también había presentado una oferta, con precios abultados, y le pidió que escribiera una carta en que explicase las divergencias de precios. Posteriormente, el 22 de agosto de 2002, el secretario del alcalde, que era su sobrino y hablaba en nombre de éste, lo citó para preguntarle por qué había escrito esa carta. Le propuso que él también aumentara los precios de su oferta y que utilizara material de calidad inferior para pagar un porcentaje de los beneficios al alcalde. Durante esa conversación el alcalde se encontraba en la pieza contigua, con la puerta abierta. C. A. R. M. rechazó la propuesta.

2.3. El 22 de septiembre de 2002 C. A. R. M. fue informado por el secretario del alcalde de que ya no podría tener acceso a la alcaldía. C. A. R. M. le advirtió entonces que presentaría una denuncia a la Oficina Fiscal. El secretario le comunicó que tenían relaciones y estaban protegidos por el Gobierno. Posteriormente C. A. R. M. fue contactado una vez más por el contador, que le dijo que apreciaba su trabajo y el hecho de que fuera honrado y que había arreglado el desacuerdo entre él y el alcalde. También le comunicó que se le había adjudicado un contrato para la instalación de equipos informáticos en la cárcel municipal. Ese trabajo, efectuado del 25 de septiembre al 11 de octubre de 2002, se refería a equipos para la identificación de los reclusos. Así, C. A. R. M. tuvo acceso a la lista de reclusos y, entonces, el director de la cárcel le informó de que estaban detenidos en ese penal importantes delincuentes del cártel del Golfo y de que su trabajo sería peligroso, porque el sistema tenía por objeto vigilarlos.

2.4. El 11 de octubre de 2002 C. A. R. M. recibió dos llamadas telefónicas del contador, que le dijo que la instalación informática había sido destruida y que personas vinculadas a reclusos protegidos por el alcalde querían matarlo a él y a su familia. Le recomendó que abandonara el país. Ese mismo día C. A. R. M. y su familia partieron de la ciudad y se refugiaron en un hotel de la ciudad de México. Días más tarde una amiga de la familia fue a su domicilio y descubrió que su casa había sido saqueada y que había varios policías presentes en el lugar. Estos últimos le pidieron que les avisara si tenía noticias de la familia. Los autores decidieron de inmediato abandonar el país y trasladarse al Canadá.

2.5. El 16 de octubre de 2002 los autores de la queja abandonaron su país en avión con destino al Canadá. Fueron admitidos como visitantes por un período de seis meses. El 12 de noviembre se presentaron al Departamento de Ciudadanía e Inmigración del Canadá en Montreal y

reivindicaron el estatuto de refugiado. El 11 de marzo de 2004 la Junta de Inmigración y Refugiados concluyó que no tenían la condición de refugiados en el sentido de la Convención ni de personas necesitadas de protección. La Junta detectó varias incoherencias en la declaración de C. A. R. M., en particular en lo que se refiere a la presencia o ausencia del alcalde en la reunión del 22 de agosto de 2002 y el contenido de las conversaciones telefónicas que supuestamente tuvo con el contador el 11 de octubre de 2002. Además, la Junta no juzgó satisfactorias las explicaciones de C. A. R. M. de las razones por las que no había mencionado al agente de inmigración en su primera entrevista que él y su familia estaban amenazados por narcotraficantes del cártel del Golfo. En la entrevista del 12 de noviembre de 2002 con un agente de inmigración, C. A. R. M. supuestamente declaró que era perseguido por el alcalde. En su formulario de antecedentes personales y ante la Junta, C. A. R. M. indicó que temía a personas del cártel del Golfo vinculadas a los reclusos protegidos por el alcalde. Durante el procedimiento de asilo C. A. R. M. explicó que temía por el contador y que tenía miedo de ser expulsado si el agente pensaba que era un delincuente, porque no conocía las leyes del país.

2.6. El 6 de abril de 2004 los autores presentaron una solicitud de admisión a trámite del recurso de revisión contra la decisión negativa de la Junta. El 23 de junio de 2004 esta solicitud fue rechazada por el Tribunal Federal del Canadá.

2.7. El 1º de septiembre de 2005 se ofreció a los autores un procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno (EPRR). El 16 de septiembre de 2005 los autores presentaron una solicitud a este respecto. En el marco de ese procedimiento se facilitó la siguiente información y documentos suplementarios a las autoridades canadienses.

2.8. El 17 de febrero de 2005 los autores presentaron una denuncia a la policía mexicana, depositada por el hermanastro de C. A. R. M., que supuestamente fue víctima de un secuestro y del robo de su camión durante el mes de febrero. Al parecer, en ese episodio uno de sus agresores le preguntó dónde se encontraban los autores. Según el hermanastro, los agresores eran policías, pero su abogado le aconsejó supuestamente que no incluyera esa información en su denuncia a la policía. Los autores de la queja se remiten también a una carta de fecha 16 de septiembre de 2005 enviada por una amiga de la familia de los autores, en la que ella declaraba que la policía sigue vigilando su casa familiar y que "se" seguía tratando de obtener información sobre ellos. Aconsejaba a los autores que no regresaran a México. Los autores presentaron asimismo un artículo de Internet de 19 de mayo de 2004 que indicaba que un tal Rafael Cielo Ramírez, Director del Penal de San Pedro Cholula, había desaparecido después de que se dictara una orden de aprehensión contra él por delito de agresión y amenazas contra el Presidente del Consejo Auxiliar de San Rafael.

2.9. Los autores de la queja presentaron un nuevo informe sobre su estado psicológico. Se sometieron a dos evaluaciones psicológicas, una en noviembre de 2003 mientras estaba en curso el procedimiento ante la Junta de Inmigración y Refugiados, y otra en septiembre de 2005, a cargo de la misma psicóloga, que concluyó que sufrían de estrés postraumático, trastorno que se había reactivado a causa de su estatuto vulnerable y su temor a ser expulsadas a su país. L. G. U. padece una grave depresión con ideas suicidas. Los autores de la queja sostienen que el estado psicológico de toda la familia, y sobre todo de L. G. U., es frágil y requiere atención y un entorno adecuado para evitar un daño irreparable.

2.10. En apoyo a sus denuncias sobre la situación de los derechos humanos en México, los autores adjugaron informes procedentes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos. Se remiten a, entre otros, informes y documentos procedentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y de Amnistía Internacional.

2.11. El 3 de marzo de 2006 se dictó la decisión en el procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno (EPRR), por la que se determinó que los autores de la queja no habían demostrado de manera concluyente que correrían personalmente peligro de sufrir represalias por parte del ex alcalde de San Andrés, de los narcotraficantes a sueldo de éste o de policías corruptos. En la decisión se observa que la jurisprudencia indica que, salvo en casos de desmoronamiento total del aparato del Estado, lo cual no sucede en México, cabe presumir que un Estado es capaz de proteger a sus ciudadanos.

2.12. El 8 de junio de 2006 los autores de la queja solicitaron la exención de visado y la residencia permanente por consideraciones humanitarias. Al mismo tiempo presentaron una petición de aplazamiento administrativo para que se suspendiera la expulsión y se pudiera estudiar el caso humanitario. La petición de aplazamiento fue rechazada el 13 de junio de 2006. Entonces solicitaron el aplazamiento al Tribunal Federal.

2.13. El 27 de junio de 2006 los autores de la queja comunicaron al Comité que su petición de aplazamiento interpuesta ante el Tribunal Federal había sido desestimada ese mismo día. Los autores dispusieron sólo de unos minutos para expresarse y la audiencia duró menos de 20 minutos, en lugar de cerca de 2 horas, como habría tenido que ser. Los autores señalan que la jueza les reprochó que no habían solicitado la admisión del recurso de revisión, ante el Tribunal Federal, contra la decisión negativa del procedimiento de evaluación del riesgo. Ellos procuraron explicar que, de manera general, su antiguo abogado estaba cansado de tantas decisiones negativas en el procedimiento de EPRR, tanto por parte del agente encargado del procedimiento como por el Tribunal Federal, y que había motivos serios para pedir el aplazamiento. Sin embargo, la jueza no les dejó desarrollar su argumentación y rechazó la petición. Los autores estiman que no tuvieron una audiencia equitativa.

## **La denuncia**

3.1. Los autores alegan que la Junta de Inmigración y Refugiados rechazó la solicitud de asilo injustamente y de manera errónea. La Junta concluyó que había contradicciones en la declaración de C. A. R. M., cuando en realidad no las había. En relación con la presencia o ausencia del alcalde en la conversación del 22 de agosto de 2002, explican que C. A. R. M. habló con el secretario del alcalde, que actuaba en nombre de éste, mientras que el alcalde se encontraba en ese momento en una oficina contigua con la puerta abierta. Subrayan que no existe ninguna contradicción en esta parte de la declaración de C. A. R. M. En cuanto a la supuesta contradicción acerca de los agentes que los perseguían y la razón por la que C. A. R. M. no había mencionado que eran amenazados por narcotraficantes del cártel del Golfo, los autores declaran que C. A. R. M. había indicado que temía a individuos vinculados a los reclusos protegidos por el alcalde y que era buscado por la policía y el alcalde. Afirman que el responsable principal de la persecución era el alcalde, que lo hacía también a través de los miembros del cártel del Golfo y la policía corrupta. Alegan que tampoco en ese caso hubo contradicción alguna en el relato de C. A. R. M.

3.2. Además, cuando tuvo lugar la entrevista, C. A. R. M. estaba nervioso porque no conocía las leyes del Canadá y temía ser expulsado a su país. Los autores de la queja observan que las entrevistas en ese momento se hacen muy rápidamente y que C. A. R. M. no tuvo tiempo de explicarse plenamente. Subrayan asimismo que la sección de apelación de los refugiados prevista por la nueva Ley de inmigración y protección de los refugiados no se ha establecido aún, lo cual desvirtúa toda posibilidad de recurso.

3.3. Los autores afirman que están en peligro en todo el territorio mexicano. El alcalde de San Andrés Cholula, los narcotraficantes bajo su protección y los policías corruptos pueden encontrarlos fácilmente y ejecutarlos. El Estado es incapaz de garantizar su protección. Los autores se remiten a informes sobre la situación de los derechos humanos en México, entre ellos el informe de Amnistía Internacional (2006). Consideran que han presentado suficientes pruebas documentadas sobre la existencia generalizada de violaciones de los derechos humanos en México y la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas.

3.4. En cuanto a la decisión sobre el procedimiento de EPRR, los autores de la queja afirman que el agente encargado de ese procedimiento no tomó en serio los informes sobre su estado psicológico y, en particular, sobre el estado psicológico de L. G. U. Declaran que el regreso a México causaría un daño irreparable a ella y a toda la familia. Rechazan la observación del agente de que no se pone en duda la angustia y el estrés ante la posibilidad de regresar a México y que esos síntomas son comunes en las personas que se encuentran en esa situación. Estiman que el agente no tenía las calificaciones requeridas para determinar si el estado psicológico de los autores se debía a la angustia y el estrés ante un posible retorno a México o al estrés postraumático diagnosticado por la psicóloga.

3.5. El agente encargado del procedimiento de EPRR tampoco tomó en consideración las convincentes pruebas sobre las denuncias de corrupción, impunidad y falta de protección adecuada en México, y tuvo en cuenta las pruebas de manera selectiva. El agente sencillamente rechazó las informaciones sobre el secuestro del hermanastro de C. A. R. M. y la carta de la amiga de la familia que demostraba que se seguía buscando a los autores, con el pretexto de que esa carta no formaba parte de una correspondencia constante y no provenía de una fuente independiente. Sin embargo, el agente no verificó nunca si había una correspondencia constante. Por último, con respecto al artículo de Internet, el agente no niega que el autor haya instalado material informático en la cárcel ni que el director de ese penal fuese buscado por agresiones, amenazas y malversación de fondos. Sin embargo, rechaza simplemente la solicitud de los autores, concluyendo que sus denuncias sobre persecución por el ex alcalde y los narcotraficantes a su sueldo no quedaban demostradas.

3.6. Los autores declaran que la obligación de agotar todos los recursos internos existe sólo si dichos recursos son adecuados y si la posibilidad de que el afectado sea oído por la justicia es real, lo que no es el caso del procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno ni del recurso de revisión.

#### **Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad de la comunicación**

4.1. Mediante nota verbal de 28 de septiembre de 2006, el Estado Parte impugna la admisibilidad de la queja, por un lado porque no se han agotado los recursos internos y por otro

porque los autores no han demostrado la existencia *prima facie* de fundamento para la admisibilidad de su comunicación.

4.2. Respecto del agotamiento de los recursos internos, el Estado Parte alega que, tras la decisión negativa adoptada el 3 de marzo de 2006 en el procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno (EPRR), los autores podrían haber solicitado que se admitiera a trámite el recurso de revisión ante el Tribunal Federal del Canadá y que se aplazara la ejecución de la orden de expulsión hasta que se resolviera en el recurso de revisión. Sin embargo, no lo hicieron. El Estado Parte afirma que los autores no han impugnado la decisión de EPRR, a pesar de que en su comunicación figuran muchas quejas contra esa decisión.

4.3. El Estado Parte explica que para solicitar la admisión a trámite del recurso de revisión los autores sólo tenían que demostrar que se trataba de una "causa defendible", lo que representa una carga de la prueba menos exigente que la que se aplica para la revisión en cuanto al fondo. El Estado Parte explica el procedimiento aplicable en una solicitud de revisión judicial. Remite a la comunicación *T. A. c. el Canadá*<sup>1</sup>, que ilustra la posibilidad y la eficacia de solicitar la admisión a trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Federal. En esa decisión, el Comité consideró que "las solicitudes de admisión a trámite del recurso de revisión no eran una cuestión de forma, sino que el Tribunal Federal puede, si procede, examinar el fondo del asunto". Sin embargo, los autores no solicitaron que se revisara la decisión adoptada en la EPRR y dieron a entender que no consideraban que ese recurso les ofrecería una solución satisfactoria. El Estado Parte remite también al dictamen del Comité en la comunicación *M. A. c. el Canadá*<sup>2</sup>, en el que declaró que no era "competente para evaluar las perspectivas de éxito de los recursos internos, sino únicamente si existen recursos adecuados a fin de determinar si la denuncia del autor es admisible".

4.4. El Estado Parte observó en su momento que la solicitud de exención de visado y residencia permanente en el Canadá por motivos humanitarios presentada por los autores el 8 de junio de 2006 era otro recurso que no se había agotado. Una vez adoptada una decisión sobre ese recurso podrían interponer otros, en particular la solicitud de admisión a trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Federal. Asimismo, podrían pedir el aplazamiento de la ejecución de la orden de expulsión si estuvieran todavía en el Canadá cuando se adoptase la decisión sobre la solicitud basada en consideraciones humanitarias. El Estado Parte reiteró que la comunicación era inadmisibles porque no se habían agotado los recursos internos.

4.5. El Estado Parte mantiene que las alegaciones de C. A. R. M. no son creíbles y que no hay ninguna prueba de que el retorno de los autores a México comporte el riesgo de ocasionarles un perjuicio irreparable. El Estado Parte recuerda los hechos expuestos por los autores en sus solicitudes de asilo y la decisión de 11 de marzo de 2004 de la Junta de Inmigración y Refugiados. El Estado Parte observa que la comunicación se apoya en los mismos hechos y prácticamente en los mismos elementos de prueba que los que se presentaron a las autoridades canadienses y, de hecho, es prácticamente idéntica a su solicitud de visado y residencia permanente en el Canadá por consideraciones humanitarias.

---

<sup>1</sup> Comunicación N° 273/2005, *T. A. c. el Canadá*, dictamen aprobado el 15 de mayo de 2006.

<sup>2</sup> Comunicación N° 22/1995, *M. A. c. el Canadá*, dictamen aprobado el 3 de mayo de 1995.

4.6. El Estado Parte recuerda las contradicciones señaladas por la Junta de Inmigración y Refugiados, así como sus explicaciones durante ese procedimiento. Considera que las explicaciones adicionales de C. A. R. M. expuestas en la comunicación no son creíbles. El Estado Parte afirma que el argumento de que C. A. R. M. omitió mencionar al cártel del Golfo porque siempre había mantenido que su "agente perseguidor principal" era el alcalde y que "el agente perseguidor principal incluye a los otros", es especialmente poco convincente. Las explicaciones anteriores indican que no mencionó intencionadamente al cártel del Golfo porque temía por el contador y por sí mismo. Además, la declaración de C. A. R. M. no corrobora la alegación de que el alcalde era "el agente perseguidor principal", que supuestamente era quien había encargado al cártel del Golfo o a la policía que lo mataran. En el formulario de antecedentes personales C. A. R. M. indicó que lo buscaban "agentes del cártel del Golfo" y que eran los reclusos, y no el alcalde, quienes estaban "muy enfadados" con él "por haberles instalado esas nuevas tecnología de vigilancia". Es inverosímil que el alcalde quiera asesinar a C. A. R. M. y a su familia por haber instalado el sistema de vigilancia en la cárcel municipal, puesto que fue el mismo alcalde quien encargó a C. A. R. M. ese trabajo.

4.7. El Estado Parte rechaza también la segunda explicación de C. A. R. M. de que en la entrevista del 12 de noviembre de 2002, que fue muy corta, estaba muy nervioso y se sentía muy presionado, por lo que no pudo identificar correctamente a sus perseguidores. Según el Estado Parte, el agente de inmigración le hizo varias preguntas sobre la identidad de sus perseguidores y le dio ampliamente la posibilidad de explicar quién lo perseguía y por qué. La ansiedad de C. A. R. M. no basta para explicar las divergencias en un aspecto tan importante de su declaración.

4.8. Otra divergencia señalada por la Junta de Inmigración y Refugiados se refiere a la reunión que C. A. R. M. mantuvo con el alcalde el 22 de agosto de 2002. Durante la audiencia ante la Junta, C. A. R. M. declaró espontáneamente que estaba solo con el secretario del alcalde cuando éste le dijo que debía aumentar sus precios y entregar al alcalde una parte de sus beneficios. Sin embargo, el formulario de antecedentes personales de C. A. R. M. contiene una versión diferente de esa reunión, ya que el autor de la queja afirma "... llegué, el alcalde y el secretario, que era su sobrino, me dijeron que estaban de acuerdo en seguir trabajando conmigo...". Cuando se le pidió que explicara esa divergencia, C. A. R. M. dijo que estaba solo con el secretario, pero que el alcalde habría podido seguir su conversación a través del micrófono del teléfono. En la entrevista del 12 de noviembre, C. A. R. M. afirmó que fue el alcalde quien le pidió que participara en ese acto de corrupción. En la comunicación al Comité C. A. R. M. explicó que el secretario no hablaba a título personal, sino en nombre del alcalde.

4.9. En cuanto al procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno, el Estado Parte alega, en lo que respecta al informe psicológico, que el agente encargado de EPRR constató que C. A. R. M. y L. G. U. no habían seguido tratamiento para el estrés postraumático como consecuencia de la evaluación de noviembre de 2003. No volvieron a consultar a la psicóloga hasta que fueron convocados para su expulsión del Canadá. El Estado Parte subraya también que los informes psicológicos no apoyan en modo alguno la alegación principal de C. A. R. M. de que su retorno a México le causaría un daño irreparable.

4.10. También en el marco de la EPRR y en relación con la denuncia penal presentada por el hermanastro de C. A. R. M., el Estado Parte observa que este último alegó que, por consejo de su abogado, su hermanastro no había mencionado en su denuncia que sus agresores eran



aparentemente policías y que le preguntaron por el paradero de C. A. R. M. No había enviado una comunicación formal a C. A. R. M. para confirmar sus alegaciones porque temía ponerse en peligro. Según C. A. R. M., los miembros de la familia no tenían costumbre de ayudarse entre sí y su hermanastro estaba enfadado con él. El Estado Parte observa que el agente encargado de este procedimiento indicó que el hermanastro se había tomado incluso la molestia de enviar a C. A. R. M. una copia de la denuncia y otra de su tarjeta electoral.

4.11. Respecto de la carta de la amiga de la familia en que les informaba de que se los seguía buscando, el Estado Parte indica que el agente encargado de la EPRR constató que esa carta era posterior a la fecha en que se había ofrecido a los autores la EPRR y que no formaba parte de una correspondencia constante sobre incidentes similares acaecidos desde que los autores salieron de México. El agente encargado de la EPRR consideró asimismo que, si realmente los policías buscaban a los autores, no era lógico que hubieran esperado tres años para hacerlo y que la carta no provenía de una fuente independiente.

4.12. El Estado Parte indica en relación con el artículo publicado en Internet, en el que se informaba de que el ex director del penal de San Pedro de Cholula había huido después de que se dictara una orden de aprehensión contra él, que C. A. R. M. señaló en su solicitud de EPRR que se trataba de la misma persona que le había advertido de que los narcotraficantes del cártel del Golfo estaban en esa cárcel. Sin embargo, en el formulario de antecedentes personales C. A. R. M. indica que fue el secretario del alcalde quien le informó de la presencia de los narcotraficantes. El agente encargado de la EPRR llegó también a la conclusión de que en el artículo no se establecía una relación entre los sucesos relatados en él y las alegaciones de los autores. El artículo no permitía llegar a la conclusión de que la vida o la seguridad de los autores corría peligro en México.

4.13. En relación con la documentación sobre la situación general en México, el Estado Parte declara que el agente encargado de la EPRR examinó varios informes sobre la situación de los derechos humanos en México y constató, entre otras cuestiones, que "la corrupción y la utilización abusiva del sistema judicial están generalizadas". No obstante, observó que el Gobierno mexicano ha hecho algunos progresos en la lucha contra la corrupción y que existen recursos para las víctimas. El agente llegó a la conclusión de que los autores de la queja no han demostrado la incapacidad del Estado mexicano para protegerlos, dado que no utilizaron ninguno de los recursos de que disponían.

4.14. El Estado Parte mantiene que la comunicación carece del fundamento mínimo necesario. El Estado Parte recuerda la Observación general N° 1 del Comité, que establece que "incumbe al autor establecer la existencia *prima facie* de fundamento suficiente para la admisibilidad de su comunicación [...]". La comunicación presentada al Comité para su examen está en primer lugar manifiestamente desprovista de fundamento debido a la falta flagrante de pruebas que demuestren que los autores corren riesgo personal de sufrir represalias en México. Dado que la carta de la amiga de la familia no puede considerarse procedente de una fuente independiente, la comunicación se basa prácticamente en las alegaciones de C. A. R. M., cuya credibilidad se ha puesto seriamente en duda por las muchas contradicciones en su declaración. C. A. R. M. no ha demostrado que, en caso de que exista un riesgo, estaría expuesto a él en todo el territorio mexicano. El Estado Parte considera que los autores no han demostrado que estarían expuestos a un riesgo personal de tortura en todo el territorio mexicano.

### **Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte**

5.1. El 16 de octubre 2006 los autores presentaron sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte.

5.2. Por lo que respecta a la cuestión del agotamiento de los recursos internos, los autores explican que solicitaron al Tribunal Federal que suspendiera la ejecución de la orden de expulsión mientras se examinaba su solicitud basada en consideraciones humanitarias y que recibieron una respuesta negativa. Por lo tanto, el argumento del Estado Parte es erróneo. Los autores pidieron que se aplazara la ejecución de la orden de expulsión. También solicitaron que se les concediera el estatuto de refugiado y que el Tribunal Federal revisara la decisión negativa. Presentaron una solicitud en el marco del procedimiento de evaluación previa del riesgo de retorno (EPRR). Solicitaron la residencia permanente por consideraciones humanitarias. Presentaron una petición de aplazamiento administrativo para que se suspendiera la expulsión y se pudiera estudiar el caso humanitario. Los autores concluyen que la comunicación es admisible.

5.3. Los autores reiteran que el procedimiento EPRR no es un recurso eficaz y adecuado y que los agentes encargados de ese procedimiento son insensibles al sufrimiento y a los riesgos de las personas expulsadas a países donde estarían expuestas a tortura. Remiten a un documento presentado por la ONG American Association of Jurists cuando el Comité de Derechos Humanos examinó el informe del Canadá en octubre de 2005, según el cual el índice de aceptación en el Canadá del procedimiento de EPRR es tan sólo del 1,5%.

5.4. Con respecto a la alegación de que la comunicación carece del fundamento mínimo necesario, los autores afirman que presentaron varias pruebas y remiten a los informes de la psicóloga que determinan la existencia de estrés postraumático, a las diversas pruebas presentadas a las autoridades canadienses sobre la corrupción, la impunidad y la falta de protección adecuada en México, al hecho de que el hermanastro de C. A. R. M. fue secuestrado y sus secuestradores le preguntaron por el paradero de los autores, y a la carta de la amiga de la familia. Además, no se ha cuestionado que C. A. R. M. instalara material informático en el centro penitenciario. El riesgo a que están expuestos los autores queda demostrado por el hecho de que el hermanastro de C. A. R. M. fue secuestrado por personas que buscaban al autor. Cuando menos, el agente encargado de la EPRR habría debido conceder a los autores el beneficio de la duda.

5.5. Los autores concluyen que han agotado los recursos internos y que no existen elementos suficientes que demuestren que la comunicación carece del fundamento mínimo necesario. Por último, declaran que han demostrado que sufrirían un perjuicio irreparable si son expulsados a México.

### **Comentarios del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación**

6.1. Mediante nota verbal de 8 de enero de 2007 el Estado Parte reitera que la comunicación es inadmisibile porque no se han agotado los recursos internos y porque los autores no han establecido la existencia *prima facie* de fundamento para la admisibilidad de su comunicación. Respecto del agotamiento de los recursos internos, el Estado Parte señala que los autores le atribuyen afirmaciones que no ha hecho. Nunca se ha dicho que los autores no hayan presentado

una petición de aplazamiento ante el Tribunal Federal del Canadá. En sus observaciones de 26 de septiembre de 2006, el Estado Parte indicó claramente que si los autores hubieran solicitado la admisión a trámite de un recurso de revisión, también habrían podido pedir el aplazamiento de la ejecución de la orden de expulsión y permanecer en el Canadá hasta que se hubiera resuelto en el recurso de revisión de la EPRR, y que podrán pedir el aplazamiento de la ejecución de la orden de expulsión si todavía están en el Canadá cuando se adopte una decisión sobre la solicitud, por consideraciones humanitarias. El Estado Parte señala que se trata una vez más de recursos muy distintos que no se excluyen mutuamente.

6.2. El Estado Parte informa de que el 22 de diciembre de 2006 se desestimó la solicitud de residencia permanente por motivos humanitarios porque los autores no habían demostrado que si regresaban a México estarían personalmente expuestos a ser víctimas de las fuerzas del orden, el alcalde de San Andrés Cholula o los narcotraficantes del cártel del Golfo. El Estado Parte indica que los autores pueden pedir la admisión a trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Federal del Canadá contra esa decisión. También podrán solicitar al Tribunal Federal que se aplase la ejecución de la orden de expulsión hasta que se resuelva sobre ese recurso.

6.3. El Estado Parte reitera sus alegaciones anteriores y mantiene que la comunicación es inadmisibile, por una parte, al no haberse agotado los recursos internos y, por otra, al no haber demostrado *prima facie* los autores la fundamentación de sus alegaciones.

### **Información y comentarios suplementarios de los autores**

7.1. El 24 de enero de 2007 los autores informaron al Comité de que su solicitud de residencia permanente por motivos humanitarios había sido desestimada el 22 de diciembre de 2006 y que habían solicitado la admisión a trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Federal. El 28 de febrero de 2007 los autores informaron al Comité de que el 26 de febrero de 2007 se había rechazado su petición de aplazamiento de la ejecución de la orden de expulsión.

7.2. El 7 de marzo de 2007 los autores presentaron sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte. Reiteran sus argumentos sobre el agotamiento de los recursos internos. Subrayan que la solicitud basada en consideraciones humanitarias fue rechazada, al igual que la admisión a trámite del recurso de revisión. Reiteran que han agotado todos los recursos disponibles. En vista de su situación, se han visto obligados a permanecer ilegalmente en el Canadá.

7.3. Respecto de la presunta falta de fundamento mínimo, rechazan la afirmación del Estado Parte de que la carta de la amiga de la familia no proviene de una fuente independiente. No tienen motivos para exigir que la carta forme parte de una correspondencia constante. La conclusión de la EPRR en este procedimiento es una demostración más de que ese recurso no es efectivo ni adecuado, y de que el agente encargado de la EPRR buscó cualquier motivo para rechazar su solicitud. La única respuesta del agente encargado de la EPRR al argumento de que los derechos de los autores no estarían protegidos en México es que el Gobierno ha declarado su intención de cambiar esa situación. Los autores reiteran también sus observaciones sobre la existencia de varias pruebas que apoyan sus alegaciones.

7.4. Se remiten también a un documento de 2005 de la ONG Centro Miguel Agustín Pro Juárez sobre la Tortura en México, en el que esa organización señala que, como ha reconocido el Gobierno mexicano en su informe al Comité contra la Tortura, entre 1997 y 2003 ninguna

persona ha sido condenada en México por el delito de tortura. Concluyen que han agotado los recursos internos, que no hay elementos suficientes para demostrar que la comunicación carece del fundamento mínimo necesario y reiteran que han demostrado que si regresan a México estarían expuestos a un perjuicio irreparable.

### **Deliberaciones del Comité**

8.1. Antes de examinar las alegaciones contenidas en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si la queja es o no admisible de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o solución internacional.

8.2. De conformidad con el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, el Comité no examina ninguna comunicación a menos que se haya cerciorado de que los autores de la queja han agotado todos los recursos internos disponibles; no se aplicará esta regla cuando se haya determinado que la tramitación de los recursos se ha prolongado injustificadamente, o no sea probable que, después de un juicio justo, se ofrezca un remedio eficaz a la presunta víctima.

8.3. El Comité observa que el Estado Parte impugna la admisibilidad de la queja porque no se han agotado los recursos internos, dado que los autores no han solicitado la admisión a trámite del recurso de revisión ante el Tribunal Federal del Canadá contra la decisión en la EPRR de 3 de marzo de 2006, y porque los procedimientos relativos a la demanda de residencia por consideraciones humanitarias no han concluido. El Estado Parte observa que los autores no han cuestionado esa decisión, a pesar de que en su comunicación al Comité figuran muchas alegaciones contra ella. El Comité toma también nota de las alegaciones de los autores de que el procedimiento de EPRR y la revisión de la decisión por el Tribunal Federal no son recursos adecuados ni eficaces, así como de la información presentada sobre los numerosos recursos intentados.

8.4. Con respecto al agotamiento de los recursos internos, el Comité observa que los autores presentaron una solicitud de asilo y que, tras la decisión negativa adoptada en ese procedimiento, interpusieron un recurso de revisión ante el Tribunal Federal. También presentaron una solicitud de EPRR, e introdujeron una solicitud de residencia por razones humanitarias, así como una solicitud de control judicial ante el Tribunal Federal, tras una decisión denegatoria en este procedimiento, la cual, según la última comunicación de la Junta, está todavía en curso. Además, en dos ocasiones, solicitaron un aplazamiento para evitar su deportación. El Comité toma nota igualmente de que los autores no solicitaron autorización para presentar una demanda de control judicial contra la decisión denegatoria de la EPRR. No obstante, el Comité observa que los autores depositaron su solicitud el 12 de noviembre de 2002 y que, más de cuatro años más tarde, no saben aún cuál será su suerte. En esas circunstancias, el Comité estima que el procedimiento en su conjunto no ha concluido en un plazo razonable y, en consecuencia, la comunicación es admisible según el apartado b) del párrafo 5 del artículo 22

8.5. El Comité debe pronunciarse sobre la cuestión de si la devolución de los autores a México violaría las obligaciones del Estado Parte, en virtud del artículo 3 de la Convención, según el cual ningún Estado procederá a expulsar o devolver a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a la tortura.

8.6. El Comité debe pronunciarse sobre la cuestión de si, como prevé el párrafo 1 del artículo 3, hay razones fundadas para creer que los autores serían sometidos a tortura si fueran devueltos a México. Para tomar esa decisión, el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, incluida la existencia de un conjunto de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, graves, flagrantes o masivas. No obstante, el objeto de ese análisis es determinar si los autores correrían personalmente el riesgo de ser sometidos a tortura en el país al que serían devueltos. Se deduce que la existencia en un país de un conjunto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, graves, flagrantes o masivas no constituye por sí sola razón suficiente para determinar que una persona determinada correría peligro de ser sometida a tortura a su regreso a ese país. Debe haber otros motivos que hagan pensar que el interesado se encontraría personalmente en peligro. De igual modo, la ausencia de un conjunto de violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos no significa que una persona no pueda ser sometida a tortura en su situación particular.

8.7. El Comité recuerda su observación general relativa al artículo 3, en la que declara que debe determinar si hay motivos serios para creer que el autor será sometido a tortura si es devuelto al país de que se trate, y que la existencia de ese riesgo debe apreciarse según elementos que no se limiten a simples suposiciones o sospechas. No es necesario demostrar que el riesgo corrido es altamente probable, pero ese riesgo debe ser corrido personal y actualmente.

8.8. El Comité toma nota de que el Estado Parte ha señalado numerosas contradicciones en el relato presentado por el principal autor a las diferentes autoridades que han examinado sus alegaciones. Toma nota igualmente de las informaciones proporcionadas al respecto por los autores, especialmente en el sentido de que algunas de las contradicciones alegadas eran resultado de malentendidos sobre lo que había expresado C. A. R. M., que en su primera entrevista estaba alterado y que en las entrevistas no había tenido tiempo suficiente para explicarse.

8.9. No obstante, el Comité estima que los autores no han dado explicaciones satisfactorias sobre algunos de los aspectos planteados por el Estado Parte, en especial sobre las contradicciones acerca de la identidad de sus perseguidores y las divergencias alegadas sobre la conversación en la alcaldía. El Comité observa que los autores no han sido detenidos nunca, que no han interpuesto nunca denuncia con motivo de los acontecimientos que alegan, ni han solicitado la protección de las autoridades mexicanas ni han intentado refugiarse en otra región de México.

8.10. En lo que se refiere a la carga de la prueba, el Comité recuerda su jurisprudencia, según la cual incumbe generalmente al autor presentar argumentos defendibles, y el riesgo de tortura debe apreciarse según elementos que no se limitan a simples suposiciones o sospechas<sup>3</sup>.

8.11. El Comité estima, sobre la base de todas las informaciones presentadas, que los autores no han proporcionado elementos de prueba suficientes que le permitan considerar que estén

---

<sup>3</sup> Véase *M. Z. c. Suecia*, comunicación N° 256/2004, dictamen aprobado el 17 de mayo de 2006, párr. 9.5; *M. A. K. c. Alemania*, comunicación N° 214/2002, dictamen aprobado el 14 de mayo de 2004, párr. 13.5; *S. L. c. Suecia*, comunicación N° 150/1999, dictamen aprobado el 11 de mayo de 2001, párr. 6.4.

expuestos a un riesgo previsible, real y personal de ser sometidos a tortura si fueran expulsados a su país de origen.

9. En consecuencia, el Comité contra la Tortura, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, estima que la devolución de los autores a México no constituye ninguna violación por el Estado Parte del artículo 3 de la Convención.

[Aprobada en español, francés, inglés y ruso, siendo la francesa la versión original. Posteriormente, se publicará también en árabe y chino como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

-----